ARGENTINA (2000-2015)

(1) Evolución macroeconómica, distribución del ingreso y pobreza

Luego de atravesar una profunda crisis en los años 2001 y 2002, Argentina inició un ciclo de intenso crecimiento de su PIB per cápita. Esto fue posibilitado tanto por la devaluación monetaria a través de la cual se abandonó un régimen de paridad fija con el dólar (establecido en los años '90) como por un contexto mundial de alza de los precios de *commodities* exportadas por el país. Tras caer casi 8,7% en promedio entre 2001 y 2002, el PIB per cápita se expandió a una tasa de 6,6% promedio anual entre 2003 y 2008; y a un más exiguo ritmo de 2,5% anual entre 2009 y 2014. Ello se dio en el contexto de una economía "abierta" a los flujos del comercio internacional: en términos físicos, las exportaciones crecieron en promedio cerca de 37% entre 2000 y 2014, y las importaciones lo hicieron 44%.

En los años de reforma estructural, la tendencia distributiva dominante había sido la concentración de ingresos. Durante el ciclo post-reformas, el crecimiento del ingreso disponible coincidió con cambios en su distribución. En plena crisis, entre 2000 y 2003, la brecha entre el quintil más rico y el más pobre pasó de 18,4 a 23,7 veces; y desde allí se redujo a 12,4 veces en 2013. Esta evolución también se evidencia en la evolución del coeficiente de Gini, que pasó de .578 en 2002 a .475 en 2014.

Como correlato del aumento del ingreso y la tendencia declinante de la desigualdad, se redujo la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema (indigencia). Luego de crecer hasta niveles inéditos en 2002 y 2003 –tras el efecto que tuvo la devaluación monetaria– la pobreza declinó: entre 2002 y 2014 pasó de 45,4 a 22,1% y la pobreza extrema se redujo de 22,7% a 5,1% en el mismo lapso. De todos modos, cabe subrayar que tanto los valores del coeficiente de Gini como la incidencia de la pobreza se encontraban muy por encima de los promedios que la sociedad argentina había alcanzado hasta mediados de los años '70.

(2) El escenario socio-laboral, el sector informal y la distribución de ingresos laborales

Los últimos tres lustros dan cuenta de algunos cambios significativos y otros comportamientos duraderos en el escenario socio-laboral. Se destaca la reducción de la desocupación abierta, que luego de llegar a 19,2% en 2002, se redujo a 7,3% en 2014. Este desempeño se dio en el contexto de una tasa de actividad sostenida, lo que da cuenta de un proceso de absorción neto de empleo en el ciclo post-reformas. Sin embargo, el riesgo relativo de desempleo entre los jóvenes (de 15 a 24 años) se profundizó: en tanto que en el año 2000 la tasa entre los primeros era sólo 1,8 veces más alta que la tasa general, hacia 2014 la superaba 2,5 veces.

Durante el ciclo post-reformas se advirtió una retracción de la participación del sector informal (SIU) en la estructura ocupacional urbana argentina. Ello se debió principalmente a la reducción del componente no asalariado. No obstante, hacia 2014, casi 4 de cada 10 ocupados pertenecían al SIU, es decir, se desempeñaban en

actividades de muy baja productividad. Al mismo tiempo, la proporción de ocupados en empleos de pobreza se ubicaba, para entonces, en niveles similares a los de los años previos a la devaluación de 2002 (13,1%). Ello significa que para muchos trabajadores, el acceso a un empleo no se constituyó en un canal suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.

Los ingresos medios de la población ocupada han mostrado, entre 2000 y 2014, un comportamiento de "U". La devaluación del año 2002 condujo a una fuerte retracción de ingresos. El significativo crecimiento verificado entre 2003 y 2014 fue, principalmente, una recomposición de los niveles previos. Sin embargo, a este tipo de crecimiento del ingreso laboral también subyació un cambio en la distribución: la brecha entre los ocupados del quintil más rico y más pobre pasó de 11,5% en 2000 a 9,9% en 2014. La menor reducción de la brecha de desigualdad de ingresos laborales en comparación con los ya mencionados ingresos totales da cuenta de la creciente importancia de los ingresos no laborales (en especial, transferencias monetarias) entre los quintiles más pobres entre 2003 y 2014. Por último, los ocupados en el SIU vieron mantenerse la brecha de ingresos que los diferenciaba de aquellos que se insertaban en el sector más dinámico de la economía, lo que da cuenta de una desigualdad "estructural" persistente a nivel del mercado de trabajo.

(3) Estado del desarrollo humano y el bienestar social

El Índice de Desarrollo Humano en Argentina se incrementó significativamente pasando de .762 en 2000 a .836 en 2014. Otros indicadores clave del desarrollo humano también tuvieron comportamientos positivos: la esperanza de vida al nacer se incrementó de 73,8 a 76 años entre 2000 y 2013; la tasa de mortalidad entre menores de 5 años se redujo de 20,2 a 13,4‰.

En cuanto a los accesos educativos, la Argentina, se mantuvo cerca de la universalidad en la tasa de matrícula de la educación primaria. En secundaria, se pasó de 82,2% a 89,1% entre 2007 y 2012 y en pre-escolar, de 60,9% a 67,2%. Es decir que una amplia franja de población infantil no accede aún a la educación obligatoria. Finalmente, entre 2000 y 2012 la tasa bruta de matrícula en la educación superior pasó de 53,1 a 80,3%.

En relación con el acceso a servicios urbanos y de infraestructura, entre 2003 y 2014 el porcentaje de hogares que no tenían acceso a desagüe adecuado pasó de 37,5 a 31%. Si bien se destaca la evolución positiva, alrededor de un tercio de los hogares presentaba déficit en este tipo de recursos. Entre 2003 y 2014, la proporción de población que residía en viviendas inadecuadas pasó de 32,9% a 16,7%, dando cuenta tanto de una evolución positiva como de inequidades persistentes en la población.

Algunos indicadores subjetivos del bienestar se asocian a la esfera de la vida ciudadana. La desconfianza en la democracia se mantuvo estable en torno a 30% de la población, dando cuenta de que 7 de cada 10 personas en Argentina apoyan el sistema democrático. La desconfianza en el gobierno pasó de 92 a 67% entre 2000 y 2015. La percepción de desprotección frente al crimen se redujo de 90 a 78% entre 2007 y

2015, revelando que 8 de cada 10 personas sentían que su protección frente al delito no estaba garantizada por parte de las autoridades.